

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

RADICADO:	76001-23-33-000- 2022-00829-00
ACCIONANTE:	GUILLERMO CÁRDENAS GARCÍA justiniano211@gmail.com
ACCIONADO:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: GUILLERMO POVEDA PERDOMO

Auto interlocutorio No. **146**

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

(Rechaza por incumplimiento de requisito de renuencia)

Procede el Despacho a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de cumplimiento de la referencia.

I. ANTECEDENTES

El señor GUILLERMO CÁRDENAS GARCÍA, a través de apoderado judicial, promovió acción de cumplimiento contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES – para obtener el cumplimiento de «a) “Los literales (b, primera parte) y (c, inciso 3o) del artículo 9º del decreto 1161 de 1994 y el artículo 55 del decreto 1406 de 1999, modificadorio del decreto 1161 de 1994.

Adujo que la entidad accionada, como administradora del régimen pensional de prima media con prestación definida al negarse a devolver y pagar el valor o importe sin rendimiento, de las consignaciones en exceso hechas por el accionante para su pensión, equivalentes a 146 semanas adicionales a las obligatoria, incumple las normas relacionadas anteriormente.

Aportó como pruebas las que se enlistan a continuación:

Resolución No. 111385 de 2011, expedida por el Seguro Social *«Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el Régimen Solidario de Prima Media de Prestación Definida del Sistema General de Pensiones»*, en favor de **Guillermo Cárdenas García**.

Escrito contentivo de derecho de petición presentado por el accionante el 28 de julio de 2022 ante Colpensiones, con el objeto de obtener la devolución de 146 semanas cotizadas en exceso para pensión, sin rendimiento.

Comunicación emitida por Colpensiones No. de Radicado BZ2022_10384392-2226813 del 28 de julio de 2022, mediante la cual le indicó al solicitante sobre su petición de *«solicitud de devolución de 146 semanas cotizadas»* que para gestionarla correctamente es necesario que entregue un listado de documentos completamente diligenciados, lo cual le permitirá recolectar, almacenar y tratar la información mínima para el efecto.

II. CONSIDERACIONES

La Ley 393 de 1997, que desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política, en relación con el ejercicio de la acción de cumplimiento, dispuso dentro de los requisitos para acudir a este medio de control, los siguientes:

«Artículo 10°.- *Contenido de la Solicitud. La solicitud deberá contener:*

(...)

*5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del inciso segundo del artículo 8 de la presente Ley, **y que consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva.***

(...)

7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.

(...))»

Adicionalmente, el inciso segundo del artículo 8 de esta disposición en concordancia con el artículo 146 del CPACA, consagran como **requisito de procedibilidad** la constitución en renuencia de la autoridad que incumple, en los siguientes términos:

*«Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente **haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.** Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.»*

En esa medida, la procedibilidad de la acción de cumplimiento demanda del accionante, como regla general, la constitución en renuencia del accionado, excepto aquellos casos donde se presente riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, siempre que se encuentre debidamente sustentado en la demanda.

Frente al requisito de procedibilidad, vale la pena citar lo señalado por el Consejo de Estado respecto a los requisitos del mecanismo, así:

*«Para que la acción de cumplimiento prospere... se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos: i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes. ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento. iii) **Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda,** bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento... iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que la hace procedente.*

(...)

La Ley 393 de 1997 dispone que la acción de cumplimiento procede cuando **se ha demostrado la renuencia del demandado** a cumplir con el deber legal o administrativo omitido, lo cual sólo puede excusarse cuando se sustenta en la demanda la inminencia de un perjuicio irremediable que exige la intervención inmediata de la orden judicial. Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos

*supuestos: De un lado, **la reclamación del cumplimiento** y, de otro, **la renuencia**. El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien **no está sometida a formalidades** especiales, se ha considerado que **debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento**. Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella...». (Resaltado fuera de texto)*

Bajo estos parámetros, es evidente que la constitución en renuencia **dista sustancialmente del derecho de petición ordinario**, pues este último tiene consagrado un término de quince (15) días para ser resuelto (art. 14 Ley 1755 de 2015) y puede desencadenar en un acto ficto o presunto negativo por el silencio de la administración dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la solicitud (art. 83 Ley 1437 de 2011), mientras la renuencia se rige por norma especial (artículo 10 de la Ley 393 de 1997) y el plazo es de diez (10) días.

III. CASO CONCRETO

Revisados los anexos de la demanda, se aprecia que el accionante, en calidad de pensionado, elevó solicitud ante Colpensiones con miras a obtener la devolución de los aportes pensionales cotizados en exceso. La entidad, para tramitar la precitada solicitud, le exigió el diligenciamiento y presentación de una serie de documentos.

De lo anterior se advierte, que el accionante omitió el deber de cumplir con el requisito formal de la demanda contenido en el numeral 5° del artículo 10 de la Ley 393 de 1997, que a su vez es requisito de procedibilidad de la acción conforme al inciso segundo del artículo 8 de la misma norma, como quiera que no cumplió con la carga de constituir en renuencia a la entidad accionada, pues en el escrito aportado, **lo reclamado es la devolución de una suma dineraria** aportada en exceso, según el criterio del accionante.

De todas maneras, el requisito de renuencia no puede ser obviado en este asunto, pues tampoco se aprecia riesgo de sufrir un perjuicio irremediable y mucho menos fue sustentado en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO-. RECHAZAR, de plano, la demanda de acción de cumplimiento presentada, a través de apoderado judicial, por Guillermo Cárdenas García, con fundamento en lo expuesto.

SEGUNDO-. Reconocer personería judicial al abogado Héctor Julio Hurtado Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.257.859 y tarjeta profesional No. 46.750 del C. S. de la J. para representar al accionante, en los precisos términos del memorial poder aportado.

TERCERO-. Notificar esta decisión al accionante en los términos del artículo 14 de la Ley 393 de 1997.

CUARTO. – ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia.

Por Secretaría, comuníquese esta decisión al accionante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firma electrónica)
GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Magistrado

(firma electrónica)
OMAR EDGAR BORJA SOTO
Magistrado

(firma electrónica)
EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO

KC